

Fecha del plebiscito

215

Por Andrés Allamand

Durante la presente semana se ha especulado respecto de la fecha en que se efectuará el plebiscito para ratificar o rechazar el nombre de la persona que los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y de Orden designen como candidato para ocupar el cargo de Presidente de la República, en conformidad con las disposiciones constitucionales pertinentes.



Al respecto, existe una alta desinformación en la opinión pública en cuanto a las normas que reglamentan la materia.

En primer lugar, hay mucha gente que piensa que la designación la efectuará la Junta de Gobierno, en circunstancias que la disposición vigésimo séptima transitoria establece que -como antes se indicara- la facultad corresponde a los Comandantes en Jefe y al General Director de Carabineros. La diferencia no es trivial, ya que el Presidente de la República no integra la Junta de Gobierno y en cambio sí participará en la decisión conjunta que deberá adoptarse.

En segundo lugar, la especulación respecto de la fecha se produce porque la misma disposición constitucional mencionada establece que con el objeto de efectuar tal designación, los Comandantes en Jefe y el General Director de Carabineros deberán reunirse "90 días antes, a lo menos", de la fecha en que expira el actual mandato presidencial (11 de marzo de 1989). A su vez, la Constitución indica que "el plebiscito deberá efectuarse no antes de 30 ni después de 60 días de la proposición correspondiente, y se llevará a efecto en la forma que disponga la ley". En consecuencia, la última fecha en que podría efectuarse tan trascendental reunión es el 11 de diciembre de 1988, y adoptada la designación del candidato, el plebiscito tendría lugar entre el 11 de enero y el 11 de febrero de 1989.

Como se advierte de todo lo anterior, la discusión se produce porque la Constitución se limitó a establecer la

fecha final en que la designación debe adoptarse, pero nada dijo respecto de la anticipación de la misma, permitiéndola expresamente. En consecuencia, tiene fundamento legal afirmar que ella podría adoptarse "en cualquier momento".

En tal entendido, adquieren importancia las declaraciones previas y reiteradas en los últimos días por los miembros de la Junta de Gobierno en cuanto a que el plebiscito se efectuaría sólo cuando se alcanzase una suma de inscritos del orden de los seis millones (mediados de 1988 según estimaciones oficiales). La razón es simple: si el plebiscito se efectúa con un universo electoral restringido, como es el que existiría a comienzo del próximo año, la legitimidad y validez del mismo quedarían automáticamente sujetas a impugnación. Más que eso, la eventual realización del plebiscito en esa fecha entregaría argumentos gratuitos a la oposición para desconocer sus resultados y validaría el repetido -pero jamás fundado- argumento de los enemigos del Gobierno, en cuanto a que un aumento de la inscripción perjudica a éste y los favorece a ellos.

Si finalmente no se modifica la Constitución Política y prevalece el mecanismo plebiscitario, es indispensable que el resultado no sea susceptible de objeciones válidas, que traerían negativas consecuencias internas y externas para el país. Al mismo tiempo, tampoco hay que perder de vista que la estabilidad política se vería sin duda comprometida hacia el futuro si tan trascendental acto electoral es objeto de múltiples discusiones, en cuanto a su legitimidad. Por lo anterior, es fundamental que las autoridades cautelén ese objetivo superior, sin embarcarse en fórmulas que sólo podrían conducir a victorias "pírricas", más aún cuando, según propias aseveraciones, todo indicaría que es posible alcanzar un triunfo inobjetable.